

Imprimir

La participación está estrechamente vinculada al desarrollo de los conflictos violentos por los que ha pasado el país. Desde la misma conformación de la naciente república en 1810 se inició el enfrentamiento entre dos modelos de Estado el centralista y el federalista, disputa que se expresó de manera violenta y dio paso a una larga inestabilidad política durante el siglo XIX, *“nueve grandes guerras civiles, dos internacionales con el Ecuador y decenas de revueltas regionales, especialmente durante el periodo federal”* (Tirado, 1984, p.366). En disputa estaban las ideas que preconizaban la abolición de la esclavitud, la separación de la iglesia del Estado, la liquidación de los resguardos, es decir el proyecto de un Estado liberal, en contraposición a las ideas conservadoras que pujaban por el restablecimiento de un orden monárquico centrado en los grandes terratenientes sobre los pilares de la iglesia y el ejército. Algunos analistas coinciden en afirmar que estos enfrentamientos del siglo XIX se dieron fundamentalmente entre disputas de las elites políticas que se van configurando alrededor de los partidos conservador y liberal.

Después de la derrota de los liberales en la guerra de los mil días la hegemonía conservadora se ocupara de afianzar el modelo agrario afincado en la gran propiedad y ello generara contradicciones sociales fuertes en el campo que producen por un lado la expulsión de cientos de campesinos hacia las ciudades y por otro un fortalecimiento del control de los propietarios sobre sus trabajadores, aparceros o arrendatarios, en estas situaciones se gesta el cambio político de 1930, donde las masas inconformes de artesanos, obreros y campesinos en medio de la depresión mundial apoyan el cambio de régimen, y el partido liberal logra la presidencia de la república en cabeza de Enrique Olaya Herrera y por primera vez el cambio es impulsado por las demandas de los sectores populares.

El ascenso del liberalismo al poder trae consigo las primeras manifestaciones de violencia en distintas regiones del país, especialmente en Norte de Santander, Santander, Boyacá y Cundinamarca. Esta violencia llegará a su punto más alto con el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán que entre otras cosas dio origen a las primeras guerrillas campesinas, como la de los llanos al mando de Guadalupe Salcedo, pero también al crecimiento rápido de las ciudades donde se empezaron a gestar las primeras luchas urbanas alrededor de los servicios públicos.

En estos fenómenos históricos descansa el devenir de la participación por un lado como expresión de lucha armada y por otro como movimiento cívico y social. Mientras la guerrilla de los llanos y en especial sus leyes de los llanos servirán para inspirar el programa de Marquetalia que da origen a la guerrilla de las FARC cuya reivindicación central es “la tierra para el que la trabaja”, en las ciudades la carencia de los servicios básicos y el aumento de la población en las zonas marginales presiona el descontento popular y genera los primeros focos de organización social urbana.

En un apretado resumen puede afirmarse que la participación se ha construido en el avance de la conciencia social de los diferentes actores y en relación con su capacidad de interlocutar con el poder político, y aun cuando se hable de cooptación ello no suele darse sin la mediación de un interés particular. Pero también debe destacarse que la violencia ha sido utilizada como forma de debilitamiento de la organización social y que prácticamente logró desaparecer a la organización campesina y por supuesto exterminio prácticamente al partido político de la Unión Patriótica.

En la década de 1980 se empezaron a implementar cambios significativos como la elección de autoridades territoriales por voto popular y ellos se expresaron más ampliamente en la constitución del 1991, que sin lugar a dudas es más liberal y progresista que la de 1886. Uno de los elementos que trae consigo el nuevo marco constitucional es la participación y con ella el desarrollo de una serie de mecanismos de participación y la creación de alrededor de 111 instancias de participación, dentro de ellas por mencionar algunas, consejos de juventud, consejos territoriales de planeación, consejos de cultura, entre otros. Y se podría afirmar que la participación grosso modo pasa de ser una preocupación de las elites políticas en la orientación del Estado, a una negociación entre los intereses de las clases populares y la clase política, con su disidencia en la lucha armada que es la expresión del no acuerdo, a un esfuerzo de institucionalización de la participación y aunque estos podrían asociarse a un momento específico de la historia colombiana, como se ha intentado mostrar al inicio, es claro que estas formas de expresión de la participación conviven en el escenario actual.

Artículo completo 